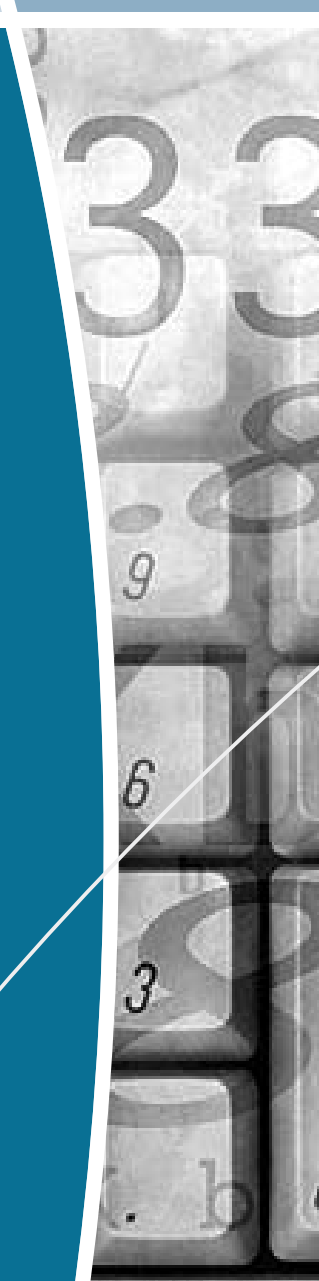


ANÁLISIS DE
COYUNTURA
MENSUAL

**ECONOMÍA
Y SOCIEDAD**



Nº 17
FEBRERO 2014





Centro de Análisis y Difusión
de la Economía Paraguaya

Organismo no gubernamental dedicado a la investigación, difusión y capacitación en temas económicos sobre Paraguay y la región.

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| POLÍTICA | Calentamiento social, entre el acelerador y el freno | 4 |
| SOCIAL | El balance social de los 25 años de democracia: el estado y las políticas importan | 6 |
| ECONOMÍA Sector Real | Los gobiernos subnacionales y la inversión pública | 9 |
| Sector Fiscal | El presupuesto y la distribución del ingreso | 12 |
| Sector Financiero | Mercado de valores: análisis del año 2013 | 15 |
| Sector Externo | Mercosur: sin cumbre y sin agenda | 19 |
| Analista invitado | Extranjerización de la tierra: consecuencias y desafíos | 22 |

DIRECTOR DEL CADEP:
Fernando Masi

Equipo Editorial:

Carla Bogado, Dionisio Borda, Fernando Masi, Julio Ramírez, José Carlos Rodríguez, Verónica Serafini.

Diseño y diagramación:

Entre Paréntesis

Economía y Sociedad, Análisis de Coyuntura Mensual es la revista digital del CADEP, de acceso gratuito. Los artículos podrán ser citados, siempre que se mencione la fuente.

Los análisis y las opiniones contenidos en los mismos no reflejan necesariamente la posición institucional del CADEP y son de responsabilidad exclusiva de sus autores.

La publicación de *Economía y Sociedad* es posible gracias al apoyo del programa *Think Tank Initiative (TTI)* del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.

PRESENTACIÓN


ECONOMÍA Y SOCIEDAD PRETENDE CONTRIBUIR AL ENSANCHAMIENTO DEL ESPACIO DE DEBATE, OFRECIENDO A SUS LECTORES UN ANÁLISIS MENSUAL DEL PROCESO ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PAÍS.

Esta revista digital del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, incluye las áreas: política, social y económica. Esta última, desglosada en cuatro sectores: real, fiscal, financiero y externo. Profesionales comprometidos con el país abordan aquí las causas y consecuencias de los acontecimientos y buscan promover su discusión entre los diferentes actores sociales y agentes económicos.

En este número nos acompaña como analista invitado Luis A. Galeano, que abordará el tema de las consecuencias y los desafíos de la extranjerización de la tierra en Paraguay. Así, Economía y Sociedad asume el compromiso de acercarle a su lector el análisis de nuevos temas para el debate.

Las respuestas y sugerencias de los lectores serán bienvenidas. Con esta iniciativa el CADEP, coherente con su principio de no reflejar intereses sectoriales ni políticos, espera aportar al debate público análisis objetivos que contribuyan a crear pensamiento crítico y a canalizar las demandas ciudadanas.

Asunción, febrero de 2014



CALENTAMIENTO SOCIAL, ENTRE EL ACELERADOR Y EL FRENO

JOSÉ CARLOS
RODRÍGUEZ

ANTE LA DISMINUCIÓN DE LA PROTECCIÓN ESTATAL, HAY PRÓDROMOS QUE ANUNCIAN MAYOR MOVILIZACIÓN CIUDADANA, AUNQUE ESTA NO SEA LA TRADICIÓN DE UNA SOCIEDAD COMO LA NUESTRA QUE BUSCA FAVORES PERSONALES DEL ESTADO, QUE TIENE UNA ESCASA VISIÓN PARA EMPRENDER ACCIONES COLECTIVAS Y CONQUISTAR NUEVOS DERECHOS, ESTO ES, PARA MATERIALIZAR SU CONTRATO SOCIAL. ÉSTE, ESCRITO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES, FUNCIONA MUY POCO COMO AGENDA O PROPÓSITO DEL GOBIERNO. PERO LA MOVILIZACIÓN SOCIAL ES LÁNGUIDA POR FALTA DE CONCIENCIA Y TAMBIÉN ESTÁ DESFAVORECIDA POR UNA ADMINISTRACIÓN DEL PODER QUE CUENTA CON LA CASI INCONDICIONAL DISCIPLINA DE LA CLASE POLÍTICA MAYORITARIA.

En marzo se sabrá si hay nuevos actores sociales articulados en las calles, junto a los campesinos que se manifiestan puntualmente todos los años, desde que advino la democracia. El clima parece propicio porque hay una brecha creciente entre aquello que se procesa en las instituciones políticas y eso otro que ocurre en el mundo de la vida de la gente.

En el orden institucional el gobierno sigue invicto en su capacidad de implantar lo que se proponga. No hay ley que no corra en el parlamento, funcionario que desafíe al ejecutivo, ni correligionario que prospere a distancia o en disonancia con el gobierno. No hay trabas, obstrucciones, contestación, negociaciones severas ni tensiones entre los que mandan. Las cosas ruedan aceitadas en el eje institucional. Eso incluye las propuestas y las promesas que fueron presentadas por el gobierno, en la cuales reina lo políticamente correcto, como la lucha contra la pobreza y la integridad. El gobierno tuvo incluso la franqueza y la honestidad de reconocer la feroz situación de pobreza que acompaña a nuestro crecimiento económico. Hecho que pretenden negar los sojeros a través de 'expertos' de baja probidad, enormemente publicitados y sin ninguna seriedad. El país sojero está decidido a oscurecer los hechos rotundos y negativos. Va a mentir y desmentir todo, para que algo quede a su favor, en la polémica contra aquellos que le reclaman responsabilidad ecológica, social y fiscal, algo que los sojeros incumplen casi por completo.

En el circuito de la ciudadanía, los hechos tienen otro rumbo. Según la nueva normativa fiscal, los incrementos fiscales, los nuevos fondos genuinos para el

gasto público –por ende aquellos a ser destinados al gasto social– se generarán solo en el mediano plazo, si es que ello ocurre. El presupuesto general de la nación es de rigor, más que de expansión. Se está achicando un Estado enano. La gente pobre siente que hay menos servicios públicos, las transferencias condicionadas disminuyeron antes que aumentar porque las bajas de asistidos al vencer el plazo previsto no han sido compensadas con nuevos beneficiados. El gobierno mantiene distancia con los partidos políticos con quienes cuenta en el parlamento, de quienes consigue toda su anuencia. En síntesis, el Paraguay es la oveja negra del continente más desigual del planeta que ahora está revirtiendo este despropósito, con nuestro país remando a contramano. Porque el Paraguay no mejora su desastrosa inequidad social, pese a un extraordinario crecimiento económico, de más del 13%, muy superior al de América Latina. Las alianzas público-privadas, con las cuales se buscan fondos sin recurrir al aumento de la fiscalidad, no se realizarán tampoco de la noche a la mañana. Deberá cumplirse un proceso, habrá demora y tiene límites, siendo notoria la restricción del consumo del público, así como del estímulo a las empresas en la provisión de insumos para el gobierno. Éste tira la pelota hacia adelante, hacia el mañana, dejando en lista de espera los resultados de mejoría institucional y protección ciudadana. El tiempo pasa y todo va muy bien para cada vez menos gente, con algunas desmejoras exógenas en el entorno internacional: la revaluación del dólar norteamericano que va a encarecer los créditos y la devaluación del peso argentino que va a encarecer el costo local de la canasta popular.

La doble realidad, suavidad institucional por un lado, escasos resultados para la ciudadanía por el otro, facilita el calentamiento social: el recurso al reclamo ciudadano directo, puenteando a instituciones que tienen déficit en capacidad y en voluntad de representar intereses generales. Pero el empoderamiento ciudadano no está ocurriendo, sino en dosis homeopáticas. Estudiantes que se movilizan por el costo del pasaje o por la calidad de la enseñanza, sindicalistas por el salario, campesinos por políticas de desarrollo, defensa contra el empeoramiento de las condiciones ecológicas o por más tierra, clase media por mayor integridad de la política y hacen algunos escraches...

Nuestra ciudadanía tiene pocos propósitos colectivos y horizontes compartidos, más allá de los valores democráticos y de tolerancia adoptados con la democratización. El clientelismo no es objeto de críticas. Es el programa de una sociedad sin programas y el proyecto de una ciudadanía sin proyectos. Mendicidad de los débiles ante el poder de los fuertes. Votamos por candidatos sin programa en espera de que el cielo nos sea propicio, de que las cosas mejoren porque Dios quiere. Así nomás, sin evaluar los caminos que llevan hacia adelante y los caminos que no nos lleva hacia adelante. Entonces, aún tratándose de un gobierno cuyo programa es muy similar al implementado y fracasado en la década perdida por América Latina, y que fue un decisivo condicionante de la crisis mundial; aunque el programa gubernamental sea retirar al gobierno su responsabilidad de generar bienes públicos, así como favorecer a que las empresas se desentiendan de sus responsabilidades; ni esto es visible para la ciudadanía ni constituye un motivo de movilización y emprendimiento cívico, no en forma ostentosa.



EL BALANCE SOCIAL DE LOS 25 AÑOS DE DEMOCRACIA: EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS IMPORTAN

VERÓNICA SERAFINI

UNO DE LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES EN LA PRENSA Y EN LAS REDES SOCIALES EN EL MES DE FEBRERO FUE, SIN DUDA, LA CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA DEMOCRACIA PARAGUAYA. EN GENERAL, LAS MANIFESTACIONES Y OPINIONES CIUDADANAS Y DE MUCHAS ORGANIZACIONES SOCIALES TUVIERON UN TENOR MÁS BIEN NEGATIVO O PESIMISTA ACERCA DE LOS LOGROS SOCIALES EN EL PERIODO DEMOCRÁTICO.

Esta sensación negativa no deja de tener sustento en la realidad, pues la mayoría de los indicadores sociales siguen ubicando al Paraguay como uno de los países de menor bienestar en América Latina.

Un balance de la evolución de los principales indicadores en los últimos 25 años podría resumirse en los siguientes puntos:

1. Varios indicadores experimentaron retrocesos, como son los casos de la desigualdad del ingreso y en el acceso a la tierra, o se estancaron, entre ellos la pobreza extrema y la desnutrición. Los principales avances se observan en la mayor cobertura de los servicios de educación, salud, seguridad social y agua potable y en la disminución de la pobreza moderada, pero no es posible esconder una realidad: hemos avanzado poco en la calidad de los referidos servicios.
2. Los indicadores que mejoraron ocultan, sin embargo, grandes desigualdades que salen a luz cuando son analizados según el área de residencia (urbana/rural), sexo (hombre/mujer), idioma hablado (español/guaraní), etnia (pueblos indígenas/no indígenas) y nivel socioeconómico (pobres/no pobres). Podemos señalar que, en general, los principales avances se produjeron en el área urbana, en las personas que hablan español y no son pobres ni indígenas. La exclusión de grandes grupos sociales se mantiene y el análisis por sexo indica que las mujeres mejoraron en algunos casos y se estancaron en otros.

La principal conclusión que surge del análisis de las políticas implementadas en el periodo democrático, necesario para entender la evolución de los indicadores sociales, es que los resultados observados tienen una alta correlación con las políticas públicas y con el rol que asumió el Estado en cada uno de los ámbitos estudiados: tierra, ingresos, salud, nutrición, agua potable, educación y protección social.

La información publicada en la prensa y los múltiples escándalos de apropiaciones indebidas de tierras públicas dan cuenta del impacto que la corrupción, el tráfico de influencias, el prebendarismo y la impunidad tuvieron y siguen teniendo en el aumento de la concentración de la tenencia de tierra, a los que se agrega la ineficacia de las políticas agropecuarias dirigidas al arraigo campesino y al fomento de la agricultura familiar implementadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y el Crédito Agrícola de Habilidad.

La ausencia de políticas laborales y de generación ingresos repercutió en la escasa calidad del empleo manifestada en altos niveles de informalidad y de subocupación, problemas que fueron mitigados en parte por una mayor cobertura de la seguridad social. Este aumento de cobertura no fue producto de una formalización automática del mercado sino de una estrategia del Instituto de Previsión Social de incorporar colectivos laborales que estaban excluidos.

Como consecuencia de la pobreza de ingresos y de la vulnerabilidad del acceso a alimentos, así como de la ausencia de un programa efectivo de lucha contra este mal, la desnutrición se mantiene en niveles vergonzosamente altos para un país cuyas elevadas y sostenidas tasas de crecimiento económico se deben, en gran parte, a la exportación de alimentos.

Paralelamente al aumento de la cobertura de seguridad social (Instituto de Previsión Social), la implementación de programas no contributivos de asistencia social permitieron fortalecer la política de protección social, lo que bajó sostenidamente la pobreza moderada en los últimos años y, probablemente, contribuyó a que la pobreza extrema no aumentara a pesar de los varios eventos de sequías y de la crisis financiera internacional.

La ampliación de la cobertura educativa fue producto de una reforma que, con sus luces y sombras, logró paulatinamente expandir la infraestructura educativa, universalizar la entrega de útiles escolares e incluir el vaso de leche como parte de la política educativa.

De la misma manera, la expansión de los servicios de salud logró elevar el porcentaje de parto institucional, mantener una tendencia a la baja de las principales tasas de mortalidad y disminuir la tasa global de fecundidad por el mayor acceso de las mujeres a métodos modernos de anticoncepción. La apuesta a la mayor cobertura de agua potable tuvo como principal logro el cumplimiento de una de las Metas del Milenio.

La lentitud de los avances se explica, en parte, por el escaso presupuesto asignado a las políticas sociales que limitó la cobertura de ellas y por el relativo corto tiempo de implementación de las mismas.

En el comportamiento de los indicadores se observan dos momentos claramente diferenciados. Una década perdida -1993/2003- en la que unos indicadores mostraron alta volatilidad y otros experimentaron persistente empeoramiento. Un periodo posterior en que, a partir de 2004, muchos indicadores iniciaron una tendencia lenta pero constante de mejoramiento.

Este resultado no debería llamar la atención, pues durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos es cuando se diseñó la primera Estrategia de Reducción de la Pobreza y se implementan los primeros programas de asistencia social focalizados en la población en situación de pobreza, así como las reformas que llevaron a un aumento de la cobertura de IPS. También en este periodo aumentaron los presupuestos de los programas de índole universal de salud, educación y agua potable, lo que dio lugar al incremento de su cobertura.

Durante el gobierno de Fernando Lugo, a partir de 2011, se diseñó una política social que incluyó la continuidad y expansión de los programas anteriores y se inició la implementación de una nueva política sanitaria y de la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza.

En resumidas cuentas, el primer periodo de gobierno fue de reconstrucción de una institucionalidad socavada por el régimen dictatorial, los dos siguientes olvidaron la problemática social y sólo a partir de la gestión iniciada en 2003 se observa con claridad el interés gubernamental de incluir el problema social en la agenda pública, sobre todo el de la pobreza.

En este contexto de incipientes políticas sociales y de aumento del gasto social, parece razonable esperar una mejora en algunos indicadores de bienestar. Así como, con vacíos en la política pública y con corrupción, también son previsibles los retrocesos. Por lo tanto, la trayectoria de los indicadores sociales en el Paraguay nos dice que aspirar a mejores niveles de bienestar requiere de la democracia un mayor esfuerzo en políticas públicas y en la prioridad del gasto social.

DIONISIO BORDA

LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y LA INVERSIÓN PÚBLICA

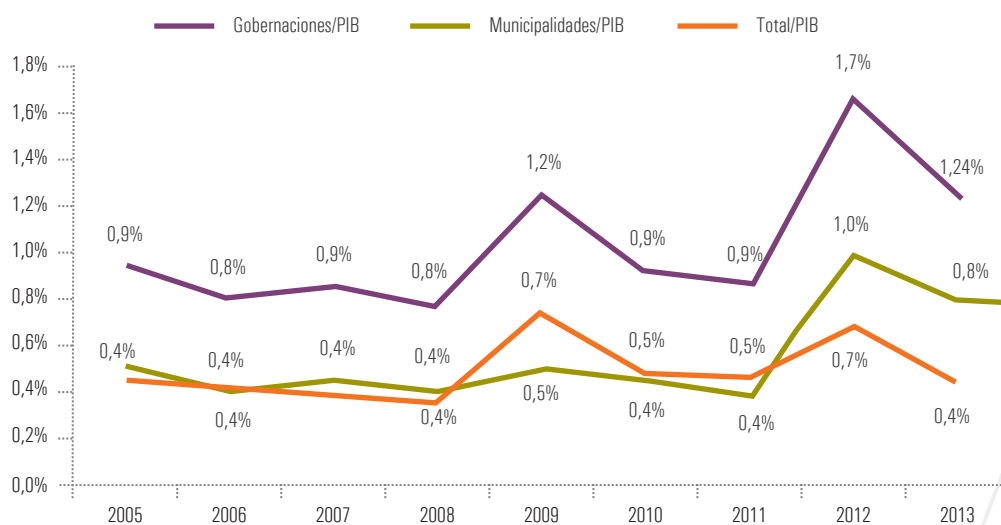


LAS GOBERNACIONES Y LAS MUNICIPALIDADES PUEDEN CONSTITUIRSE EN PIEZAS CLAVES PARA IMPULSAR LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y GENERAR EMPLEO EN EL PAÍS. ESTE ENFOQUE DE PROYECTOS DE MENOR ENVERGADURA FINANCIERA REQUERIRÁ, SIN EMBARGO, DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE FACILITE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y PERMITA SUPERAR LAS ACTUALES FALENCIAS EN LA GESTIÓN LOCAL.

INVERSIONES RECIENTES

Los gobiernos subnacionales (gobernaciones y municipalidades) reciben transferencias de la Administración Central en concepto de regalías de las hidroeléctricas y del canon a los juegos de azar. En el periodo 2005-2013 la transferencia total a estos gobiernos estuvo en torno al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), repartiéndose en, aproximadamente, partes iguales entre gobernaciones y municipalidades (ver gráfico).

GRÁFICO 1. TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES



Fuente: Ministerio de Hacienda (MH). Informe de transferencias a Gobernaciones y Municipios.

Pero hay tres hitos significativos en el comportamiento de las transferencias de la Administración Central a los gobiernos subnacionales: i) en 2009, debido a la recesión económica provocada por la crisis internacional y la sequía, como parte de su plan anti cíclico el gobierno nacional transfirió US\$ 34 millones a las gobernaciones para obras públicas (1,2% del PIB); ii) en 2012, otro año recesivo y periodo electoral, las transferencias alcanzaron un pico de 1,7% del PIB; y, iii) en 2013, con la implementación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), las transferencias llegaron a 1,2 % del PIB. En este último año las municipalidades recibieron 318 mil millones de guaraníes y las gobernaciones 74 mil millones de guaraníes (un total de 392 mil millones de guaraníes) de recursos del Fonacide, cuya distribución debería ser de 50% para gastos de capital, 30% para gastos corrientes (merienda escolar) y 20% para infraestructura y desarrollo.

Bien aplicados, estos recursos podrían ayudar a mejorar los servicios públicos de las gobernaciones y municipalidades y, al mismo tiempo, generar demanda de mano de obra local. Pero, por lo general, la capacidad institucional de los gobiernos subnacionales es débil y su capacidad de inversión y de gestión es deficiente. Además, estos gobiernos no están acostumbrados a realizar en forma sistemática la evaluación del uso y la rendición de cuentas de los recursos que reciben.

A todo ello se suma la falta de instrumentos legales que le permitan a la Administración Central evaluar la utilización de los fondos y exigir la rendición de cuentas en forma adecuada. Mientras tanto, la Contraloría General de la República solo efectúa la auditoría contable pero no realiza un control de gestión de esos recursos.

Es necesario, pues, enmendar estas debilidades y falencias para optimizar y transparentar el uso de los recursos que las gobernaciones y las municipalidades reciben del Gobierno Central. Lo que corresponde, entonces, es que la Administración Central desarrolle una estrategia de coordinación y planificación con los gobiernos subnacionales e instale capacidades a nivel de departamentos y municipios.

LAS TAREAS DE LAS GOBERNACIONES

Por lo general, las gobernaciones cuentan con dependencias sectoriales (salud, educación, agricultura, etc.) y sus tareas consisten, básicamente, en: i) coordinar con las distintas municipalidades del departamento y organizar los servicios departamentales comunes, tales como infraestructura, obras públicas, provisión de energía y agua potable, y los demás que afecten conjuntamente a más de un municipio; ii) preparar el plan de desarrollo departamental que debe coordinarse con el plan nacional de desarrollo y elaborar el programa anual de gastos a ser considerado en el Presupuesto General de la Nación; y, iii) coordinar la acción departamental con las actividades de la Administración Central.

Las gobernaciones reflejan los mismos problemas de los que adolece la Administración Central: i) debilidad de gestión; ii) pobre manejo de las inversiones; iii) escasa profesionalización del recurso humano; y, además, iv) poca iniciativa en la coordinación con los municipios.

Si bien es cierto que las gobernaciones tienen integrados sus presupuestos y operaciones en la Administración Central, es necesario que desarrollen la capacidad de mejor coordinación de la planificación con los diferentes ministerios; que sus planes de inversión estén armonizados con los de la Administración Central; que encaren un plan de calificación de sus recursos humanos; y, por último, que desarrollen un sistema de categorización de municipios para implementar programas de coordinación y fortalecimiento institucional con ellos.

LAS TAREAS DE LAS MUNICIPALIDADES

Los municipios tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Las atribuciones de las municipalidades son: i) la gestión en materia de urbanismo, medio ambiente, mercado de abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social y cuerpos de inspección; ii) la reglamentación y fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación; iii) la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos; y, iv) el acceso al crédito privado o público, nacional o internacional.

Las municipalidades presentan deficiencias generalizadas como: i) falencias en la propia planificación estratégica del municipio; ii) debilidad en la planificación urbana y ordenamiento del transporte en general; iii) problemas de limpieza, salubridad y conservación del medio ambiente; y, iv) pereza fiscal y debilidad en la gestión de sus finanzas.

Entonces, el mejoramiento de la gestión municipal exige la adopción de las siguientes medidas: i) plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; ii) estandarización de su programación presupuestaria; iii) mejoramiento de la capacidad de gestión de las inversiones y coordinación con otros niveles de gobierno; y, iv) disciplina fiscal y endeudamiento.

Estos desafíos que tienen los gobiernos subnacionales no se pueden dejar a la libre iniciativa de algunas gobernaciones o municipalidades. Es imperativo y urgente que el Gobierno Central asuma el liderazgo de un plan estratégico para priorizar las inversiones y resolver en forma gradual las falencias observadas. Pues, los gobiernos subnacionales administran sustanciales recursos que pueden mitigar las múltiples necesidades de servicios y emplear la mano de obra local.



EL PRESUPUESTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

JULIO RAMÍREZ

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO ES UN INSTRUMENTO FUNDAMENTAL QUE AÑO TRAS AÑO ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS QUE CONDUCEN LA VIDA DEL PAÍS. POR ELLO LA IMPORTANCIA DE ELABORARLO CON SERIEDAD, PRUDENCIA Y REALISMO, YA QUE LAS LIGEREZAS EN SU REALIZACIÓN OCASIONAN ONEROSOS COSTOS SOCIALES.

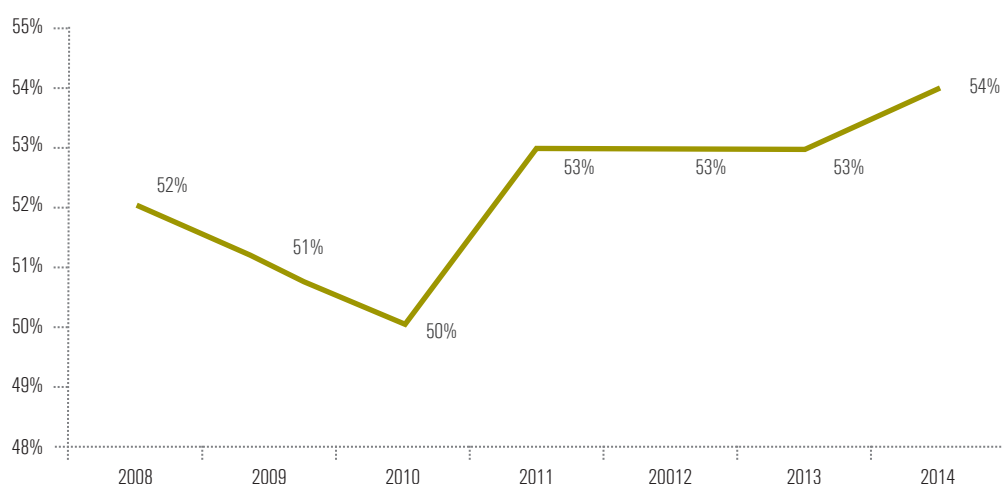
Cuando se sobreestiman los ingresos y con ello los gastos, o se ponen montos irreales y desproporcionados de inversiones, el presupuesto pierde credibilidad como instrumento de vital importancia para la vida de una nación, y se transforma en factor de incertidumbre para la toma de decisiones económicas y políticas.

Esta sensación de incertidumbre y manejo poco técnico del presupuesto se ha venido dando desde hace más de dos décadas, y tiene su origen fundamental en la pulseada entre el Ejecutivo y el Legislativo, contienda que ha favoreciendo a este último poder del Estado como se refleja en el déficit fiscal de los dos últimos años. Ciertamente este resultado negativo es manejable, pero totalmente innecesario porque tiene sus orígenes en el incremento discrecional del gasto en servicios personales en épocas electorales, con fines netamente políticos.

Por otra parte, hasta ahora no se ha logrado enfocar el gasto público en su objetivo esencial que es mejorar la calidad de vida de la población, pues, junto con el déficit fiscal y el incremento de la deuda pública, tiene lugar el estancamiento de los gastos sociales.

De hecho, la participación del gasto social en el gasto total ha tenido poco crecimiento en los últimos siete años. Si bien ha crecido en términos absolutos, a una tasa media del 13% anual, acompañando el ritmo de expansión del gasto total, el gasto social en el Paraguay se mantiene muy por debajo del de sus socios del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay), que alcanzó un promedio de 70% en 2010 según datos de la CEPAL.

GRÁFICO 1. SERVICIOS SOCIALES SOBRE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL



Fuente: Ministerio de Hacienda.

Cuando se comparan el gasto social per cápita del Paraguay y de los demás países, las cifras son alarmantes. Mientras que Argentina gasta US\$ 1.601, Brasil US\$ 1.419 y Uruguay US\$ 1.503 per cápita en programas y servicios sociales, el Paraguay apenas llega a la irrisoria suma de US\$ 147.

CUADRO 1. GASTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL MERCOSUR, 2010

| PAÍS | % DEL PIB | PER CÁPITA (*) |
|-----------|-----------|----------------|
| Argentina | 24% | 1.601 |
| Brasil | 26% | 1.419 |
| Paraguay | 11% | 147 |
| Uruguay | 22% | 1.503 |

Fuente: CEPAL.

*Dólares a Precios Constantes de 2005.

El desafío del actual gobierno es enorme y su discurso apunta en la dirección correcta. El énfasis parece estar en que buscará conectar la lucha de la pobreza con los programas de inversión, área en que está realizando una fuerte apuesta. De hecho, el ministro de Planificación del gobierno de Cartes anunció como prioridades de este año la construcción de 12.000 viviendas rurales, la apertura y habilitación de 5.000 kilómetros de caminos de todo tiempo en el interior, el reemplazo de 5.000 metros de puentes de madera por materiales de hormigón armado y el mantenimiento básico de 7.500 kilómetros de rutas¹.

¹ <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/el-presidente-cartes-pidio-cambiar-la-vida-de-la-gente-1214167.html>

Al mismo tiempo, el gobierno anunció un plan de inversiones de cinco años por un US\$ 12 mil millones, lo que significaría unos US\$ 2.400 millones de aquí al 2018, es decir el 8% del PIB². La apuesta para lograr dichos recursos estaría en la co-participación del sector privado, considerando que no se prevé un incremento sustancial de los ingresos del Estado en los próximos años. De hecho, según proyecciones del Ministerio de Hacienda, la presión tributaria se incrementaría muy lentamente pasando del 11,6% a 12,4% del PIB entre 2014 y 2016; y de 18,6% a 19,2% si se consideran los ingresos totales (royalties y otros recursos).

Pero, si bien es cierto que las inversiones tienen un efecto multiplicador en la economía por medio de la generación de empleo, la mayor competitividad y el estímulo a la inversión privada, por sí solas no bastan para lograr la equidad o la mejor distribución del ingreso. Tampoco, como es sabido, el crecimiento del PIB per cápita por sí solo es suficiente para lograr este objetivo. Por ejemplo, Burundi tiene un producto interno bruto nominal per cápita de solo 192 dólares, pero su coeficiente de Gini es de 0,33, lo que denota una mejor distribución del ingreso que, por ejemplo, Uruguay, uno de los países menos desiguales de América Latina que tiene un Gini del 0,42 con un PIB per cápita nominal de US\$ 12.000 en 2010³.

De ahí que no se debería perder el enfoque de mejorar los gastos sociales en cantidad y calidad. Pues, si no se atiende a los recursos humanos de una sociedad en su educación, capacitación y acceso al conocimiento científico y tecnológico, no se tendrá ni competitividad ni equidad. Por ello, el desafío central del gobierno sigue siendo, por un lado, generar ingresos genuinos para financiar la inversión social y, por otro, mejorar enormemente la calidad del gasto público.

² <http://www.5dias.com.py/33343-inversin-de-us-12-mil-millones-es-positiva-pero-an-falta-mucho>

³ González, I. y Martner, R (2012). "Superando el "síndrome del casillero vacío". Determinantes de la distribución del ingreso en América Latina. Revista de la CEPAL 108.

CARLA
BOGADO YUBI

MERCADO DE VALORES: ANÁLISIS DEL AÑO 2013



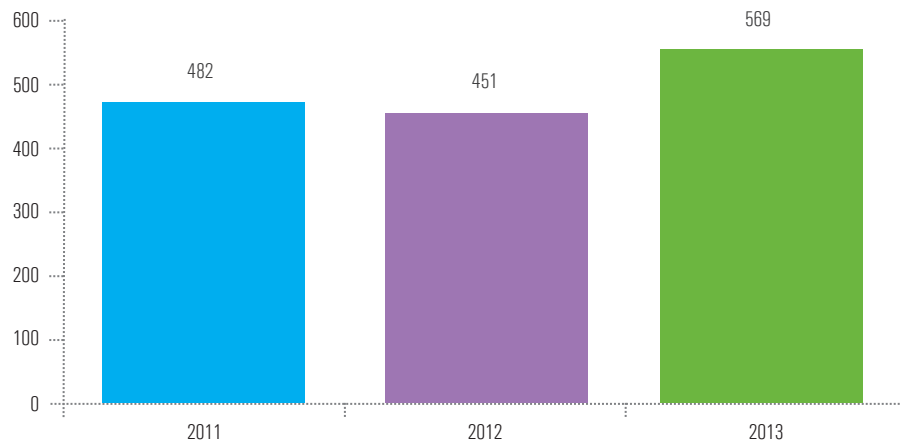
HA TRANSCURRIDO UN AÑO MÁS Y LOS CAMBIOS EN EL MERCADO DE VALORES DEL PARAGUAY FUERON EXIGUOS SI SE CONSIDERAN LOS ALTOS ÍNDICES DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL RELATIVAMENTE BUEN CLIMA DE NEGOCIOS QUE EXISTE EN EL PAÍS. POR EJEMPLO, SE HA OBSERVADO POCO CAMBIO EN EL NUMERO DE SOCIEDADES EMISORAS, QUE SOLO AUMENTÓ DE 67 EN 2012 A 73 EN 2013.

| ACTORES | % DEL PIB | PER CÁPITA (*) |
|--|-----------|----------------|
| Sociedades Emisoras de Capital Abierto | 40 | 42 |
| Sociedades Emisoras | 27 | 31 |
| Calificadoras de Riesgo | 4 | 4 |
| Administradoras de Fondos Mutuos | 1 | 1 |
| Bolsa de Valores | 1 | 1 |
| Casas de Bolsa | 6 | 7 |
| Operadores de Bolsa | 10 | 10 |
| Auditores Externos | 38 | 38 |

Fuente: CNV.

En el año 2013 las emisiones de valores de renta fija experimentaron un crecimiento de 26%. Durante los primeros seis meses del año se registró poco movimiento de emisiones, que totalizaron solamente un 18,2% del total registrado en el año. De acuerdo con datos proveídos por la Comisión Nacional de Valores (CNV), de enero a junio de 2013 solamente siete empresas habían realizado emisiones. Los meses de noviembre y diciembre fueron los más dinámicos, en los que se registraron emisiones por Gs. 91 mil millones y Gs. 315 mil millones, respectivamente.

GRAFICO 1. EMISIONES RENTA FIJA (MILES DE MILLONES DE GUARANÍES)

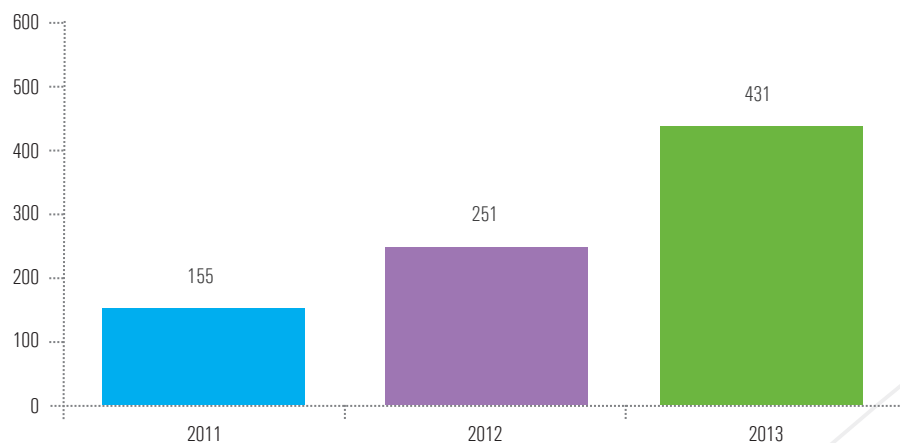


Fuente: Elaboración propia con datos de la CNV.

De otro lado, los montos efectivamente comercializados (incluyendo los mercados primario y secundario) llegaron a solo Gs. 549 mil millones en 2013 desde Gs. 542 mil millones del año anterior.

Las emisiones de renta variable registraron una variación mayor, con un crecimiento de 71,7%, aunque en el primer semestre de 2013 totalizaron solo el 35,7% del volumen registrado en el año. Los meses con mayores movimientos fueron junio y noviembre, en los que las emisiones de acciones se elevaron a Gs. 144,3 mil millones y Gs. 104,5 mil millones, respectivamente.

GRAFICO 2. EMISIONES DE RENTA VARIABLE (MILES DE MILLONES DE GUARANÍES)



Fuente: Elaboración propia con datos de la CNV.

Pero los montos efectivamente comercializados durante el año 2013 (incluyendo los mercados primario y secundario) llegaron a solamente Gs. 37,8 mil millones frente a Gs. 45 mil millones en el año anterior. Este punto llamativo sugiere que los actores económicos tienen poco interés en este tipo de instrumento, en comparación con los de renta fija. Esto puede deberse a varios motivos: **a)** los inversores poseen un perfil más conservador y prefieren asegurar una renta en el tiempo; **b)** la falta de mayor información de las empresas; y, **c)** falta de desarrollo efectivo del mercado secundario.

De esta manera se puede concluir que, en el caso del Paraguay, los bancos y las financieras siguen siendo las principales fuentes de financiamiento de las empresas. Esta situación es diametralmente opuesta a la de los países desarrollados, en los que el mercado de capitales juega un papel más importante, o inclusive dominante. Es el caso de los Estados Unidos y del Reino Unido, donde el mercado de capitales ha logrado quitar poder a las instituciones financieras intermediarias.

Como a través del mercado de capitales los prestamistas y prestatarios pueden interactuar directamente, sacando del medio al intermediario, en este caso a los bancos y financieras, el prestamista puede obtener un mayor retorno y el prestatario pagar una menor tasa de interés. Esto deriva finalmente en una economía mucho más eficiente y competitiva.

De todas maneras, el desarrollo del mercado de valores en el Paraguay se enfrenta a algunos problemas sistémicos como es, por ejemplo, el tamaño de las empresas. A diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, en el Paraguay las empresas son mucho más pequeñas, lo que hace que para muchas de ellas el costo de la emisión puede ser tan elevado que finalmente no la justifique, en comparación con la habitual forma de financiación a través de bancos o financieras. Otro aspecto que también influye en el poco desarrollo de los mercados de capitales es el excesivo poder que concentra el sistema bancario, así como la falta de inversión de los fondos de pensiones en el mercado de capitales, como se da en otros países.

No deben perderse de vista las principales ventajas, demostradas empíricamente, que otorga el mercado de valores:¹ **a)** los capitales son asignados a su mejor uso; **b)** el manejo del riesgo es más eficiente; **c)** las tasas de retorno del capital son más elevadas; **d)** aumenta el influjo de capitales; y, **e)** hay mayor cantidad de fondos disponibles para nuevas empresas. Por el lado de la economía en general los efectos positivos pueden ser observados en las siguientes áreas: **a)** aumento de la productividad; **b)** incremento del salario real; **c)** mayores oportunidades de empleo; y, **d)** estabilidad macroeconómica.

¹ *How Capital Markets Enhance Economic Performance and Facilitate Job Creation*, W. Dudley y G. Hubbard.

Finalmente se puede concluir, entonces, que la promoción del desarrollo del mercado de valores no es un tema menor y debería ser considerado por las autoridades nacionales como un objetivo principal de las políticas públicas, cuestión que hasta el momento no parece ocurrir.

FERNANDO MASI

MERCOSUR: SIN CUMBRE Y SIN AGENDA



EL ESTANCAMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA PONE HOY EN ENTREDICHO EL FUTURO DEL MERCOSUR. LOS ESFUERZOS DEL BRASIL PARA AYUDAR A LA ARGENTINA A SUPERAR SUS PROBLEMAS MACROECONÓMICOS Y COMERCIALES, PARA QUE SUBA A BORDO DE ESTE ACUERDO, SE VAN AGOTANDO. EL MERCOSUR NECESITA UN REPLANTEO DE SUS METAS Y ALCANCES PARA EVITAR UNA PÉRDIDA DE SUS ACTIVOS.

La Cumbre del Mercosur, que se debía haber celebrado en Caracas en diciembre del 2013, ha sufrido varias postergaciones y no existe aún fecha precisa de cuando se llevará a cabo. Nunca antes un hecho de esta naturaleza se había producido en el Mercosur y no existe ningún punto de su agenda interna que pueda estar causando este retraso.

De hecho, la agenda interna del Mercosur se encuentra estancada desde enero de 2012, cuando la Argentina impidió el inicio de la primera etapa del proceso de eliminación del doble cobro arancelario, que es fundamental para caminar más rápidamente hacia la etapa de la unión aduanera. Todas las decisiones adoptadas por el Mercosur desde entonces han sido menores y de escasa significación para la marcha de la integración.

El punto es cuestión es, sin lugar a dudas, la situación macroeconómica de la Argentina y los obstáculos que pone a una oferta unificada del Mercosur para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). La Argentina alega que su oferta alcanza el 80% de desgravación arancelaria de bienes, pero incluye cuotas y preferencias fijas que reducen ese porcentaje e impiden que la oferta total del Mercosur se acerque a la europea. Es decir que la Argentina exige un nivel de protección que no es compatible con un acuerdo de libre comercio.

El Brasil, que lidera las negociaciones con la UE, trata de convencer a la Argentina para que presente una oferta aceptable. Esto, sin dejar de considerar las dificultades económicas por las cuales atraviesa su socio principal del Mercosur.

Para empezar a solucionar el problema de liquidez financiera argentina, el gobierno de ese país debe tomar decisiones cada vez más severas para evitar la pérdida creciente de reservas internacionales, sincerar indicadores como la tasa de cambio y el índice inflacionario; e ir eliminando más rápidamente los subsidios para sanear las finanzas públicas.

Existen algunos indicios de que puede haber una salida del problema macro argentino. El gobierno de ese país acaba de obtener US\$ 3.000 millones de productores de soja y de bancos del país. Existe alguna certeza de un pre acuerdo con el Club de París sobre la deuda externa pública y de un acuerdo definitivo con REPSOL (nacionalización del petróleo). Al mismo tiempo, el Brasil está estudiando una línea de crédito directo (US\$ 2.000 millones) para financiar el comercio intra-firmas entre ambos países, de manera a paliar el déficit comercial argentino con Brasil¹.

Sin embargo, el problema económico argentino no es de fácil solución, y menos en el corto plazo. Es más, algunos analistas afirman que la solución vendrá solo cuando una crisis haga desaparecer el actual fracasado modelo argentino, como fueron las soluciones de los ciclos económicos argentinos de las últimas décadas.

Pero, se puede concluir que el freno a las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea no reside necesaria y únicamente en el problema macroeconómico argentino. La pregunta es si, más allá de las medidas que puede adoptar en los próximos meses para ir haciendo los ajustes macroeconómicos necesarios, el gobierno argentino tiene realmente la voluntad política de ingresar a un acuerdo de libre comercio con la UE.

En el Brasil las opiniones a nivel gubernamental se encuentran divididas. Por un lado están quienes consideran que el Brasil debe ir a un acuerdo con la UE con o sin la Argentina, posición respaldada por los industriales brasileños que ven en el acuerdo una oportunidad importante para la colocación de sus productos². Por otro lado está la opinión política de que dejar de lado a la Argentina podría crear un distanciamiento importante entre ambos países dentro del proyecto Mercosur.

Si se parte del supuesto de que no existe voluntad de Argentina de participar de un acuerdo con la UE y de que, además, la oferta de bienes y servicios de ese país ya no llega a tiempo a llenar los requisitos mínimos para este acuerdo, quedaría por ver cuál es la estrategia que puede estar adoptando el gobierno argentino.

La primera podría ser apostar al tiempo –que es lo que sucede actualmente– para que el Brasil desista finalmente de la idea del acuerdo con la UE, en coincidencia con la posición política dentro del gobierno brasileño. La segunda estrategia –por si la primera no fuera suficiente– sería argumentar que un acuerdo con la UE no es posible por las asimetrías en niveles de desarrollo y preferencias de ambos bloques. Aquí la Argentina podría argumentar, específicamente, la protección europea de su mercado agrario.

¹ Zanatta, Mauro. "Comércio com Argentina terá linha de crédito". *O Estado de Sao Paulo*, 1 de fevereiro, 2014.


² La lista de la UE no ofrecería mucha apertura en bienes agrícolas hasta tanto este tema sea resuelto en la Ronda Doha de comercio mundial.

Por un lado, la Argentina no quiere aparecer como un “spoiler” (niño malcriado), pero por otro lado sería malo para el prestigio argentino no participar en un acuerdo de esta naturaleza, el primero de mayor peso del Mercosur con un bloque desarrollado.

Sin agenda interna ni externa el Mercosur no puede avanzar. El freno para este avance en ambos frentes se llama Argentina. Con las crisis macroeconómicas brasileña y argentina en 1999 y 2001-2002, respectivamente, el Mercosur atravesó uno de sus peores momentos. Hoy, con solo un país con desequilibrios macro, el Mercosur corre el riesgo de no seguir funcionando como bloque.

En el caso de que el Brasil decida avanzar en el acuerdo con la UE acompañado solamente de Paraguay y Uruguay, y de que la Argentina siga obstaculizando el comercio intra y extra-Mercosur, se deberán replantear las metas, objetivos e intereses de este proceso de integración regional. Se deberá, como dice el presidente uruguayo, conformar un nuevo ordenamiento jurídico del Mercosur para adaptarlo a una nueva realidad.

El desafío es que el Brasil, como país líder de este bloque, acepte la adopción de metas más realistas. No estaría mal pensar en el Mercosur fijado en una zona de libre comercio (como lo es actualmente) con ciertas políticas comunitarias que refuercen las inversiones y el comercio intra-bloque –acelerando el proceso de mayor industrialización– y con el reconocimiento de asimetrías que implique compensaciones para los países y regiones menos desarrollados. El Mercosur debe ser definitivamente replanteado para preservar los activos acumulados y avanzar en la integración.



EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA: CONSECUENCIAS Y DESAFÍOS

LUIS A. GALEANO

LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA TIENE UNA LARGA HISTORIA EN EL PARAGUAY. EMPEZÓ UNA VEZ CONCLUIDA LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA, EN 1870. EN AQUEL PERÍODO HISTÓRICO SE VERIFICÓ LA VINCULACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL CON LOS PRINCIPALES CENTROS DEL CAPITALISMO MUNDIAL. EN ESE CONTEXTO SE LLEVÓ A CABO LA VENTA DE LAS TIERRAS PÚBLICAS. A LA ALTURA DEL AÑO 1914 YA SE HABÍA VENDIDO UN TOTAL CERCANO A 26 MILLONES DE HECTÁREAS, LO QUE EQUIVALÍA AL 64% DE LA SUPERFICIE DEL ACTUAL TERRITORIO PARAGUAYO. UNA ALTA PROPORCIÓN DE ESAS TIERRAS FUE ADQUIRIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS, PRINCIPALMENTE INGLESAS, FRANCESAS, NORTEAMERICANAS Y ARGENTINAS.

En aquella primera onda de extranjerización se constituyeron enormes latifundios que llegaron a abarcar entre un millón y más de cinco millones de hectáreas de tierra. Fueron explotaciones que operaban como “enclaves”, es decir, como unidades productivas extractivas y autónomas, de selectiva vinculación con la economía y la sociedad nacional. Uno de los nexos fue la absorción de mano de obra campesina e indígena en condiciones semi-serviles, en la medida en que una parte importante del pago de los salarios se realizaba en especies. Y el otro nexo, el más impactante, consistió en el proceso de concentración de la tierra. Sin bien los latifundios instalados en la Región Occidental (Chaco) accedieron a territorios inexplorados y altamente despoblados, no pocos de los que se localizaron en la Región Oriental se ubicaron en zonas donde ya existían comunidades campesinas bastante pobladas. En el año 1903 las fuerzas estatales realizaron un violento desalojo de los campesinos asentados en tierras públicas compradas por una empresa extranjera en el departamento de Concepción. Debido a la decidida reacción de dichos campesinos, el conflicto se constituyó en uno de los condicionamientos socio-político de la guerra civil que tuvo lugar en 1904.

Con la salvedad del breve régimen social-demócrata del Coronel Rafael Franco (1936-1937), que intentó impulsar un proceso intensivo de reforma agraria y revertir la alta concentración de la tierra en manos de unos pocos latifundistas, los gobiernos formados durante la primera mitad del Siglo XX estimularon, en mayor o menor medida, la persistencia de las grandes propiedades pertenecientes al capital extranjero.

La concentración y la extranjerización de la tierra durante el régimen autoritario stronista (1954-1989) empezaron a cambiar de signo. De aquella gran concentración de la tierra a través de la modalidad del enclave y de procesos productivos extractivos se pasó a la difusión de las empresas agrarias capitalistas. Durante el mencionado régimen ingresaron al país nuevos grupos empresariales. A la mayor presencia de empresarios brasileros se sumaron los provenientes de Uruguay, Europa (España, Italia y Alemania) y de algunos países asiáticos, especialmente del Japón. La mayor difusión de empresas agrarias capitalistas no impidió que continuara vigente la alta concentración de la tierra. Según los datos del Censo Agropecuario de 1991 (levantado dos años después de la caída del mencionado régimen político), el Índice de Gini alcanzó un valor muy elevado (0.91).

A partir de los años noventa se profundiza la tendencia, ya iniciada en el período histórico precedente, de fuerte difusión de la empresa agropecuaria en la mayoría de las regiones rurales del país. La concentración y la extranjerización de la tierra continúan de la mano del avance y afianzamiento de dicha modalidad productiva. Por cierto, la concentración de la tierra llega a su tope más alto, de acuerdo con la información del Censo Agropecuario de 2008 (Índice de Gini: 0.93).

La mayor penetración de las empresas agrarias extranjeras se verifica en las regiones fronterizas con el Brasil y la Argentina. Según la mencionada fuente informativa, en los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú, más del 60% de los propietarios de las explotaciones de 1.000 y más hectáreas son extranjeros. También en los departamentos de Amambay, Itapúa y Alto Paraguay, este último ubicado en el Chaco, la proporción de empresarios extranjeros, detentadores de grandes explotaciones agropecuarias, se ubica en alrededor del 50%. Son la soja y la ganadería los principales rubros de producción y exportación a los que se dedican.

La exclusión del acceso a la tierra de campesinos e indígenas tiende a incrementarse. Es un fenómeno que, a su vez, se manifiesta en dos procesos socio-políticos de rasgos crecientemente críticos. Uno de ellos consiste en los conflictos por la tenencia de la tierra entre los grupos campesinos afectados, acompañados por organizaciones regionales y nacionales del sector, y los empresarios extranjeros y sus agentes. En no pocos casos, los enfrentamientos se tradujeron en pérdidas de vida de campesinos.

El otro proceso se vincula con el fuerte incremento del precio de la tierra y las cada vez más escasas opciones de trabajos extra-prediales que, debido a la mecanización de las unidades productivas agropecuarias, enfrenta una creciente cantidad de familias campesinas. En esas condiciones, además del debilitamiento de los lazos comunitarios, una de las tendencias predominantes es la venta de sus parcelas, en los casos en que cuentan con títulos de propiedad, o de sus derechos sobre la tierra cuando se trata de meros ocupantes. Hoy en día, gran parte de las operaciones de compra de dichas parcelas campesinas es realizada por empresas inmobiliarias que, una vez que acumulan superficies suficientes de tierra, las revenden a los empresarios extranjeros, preferentemente. El paso siguiente es la migración de los campesinos desarraigados a las zonas urbanas periféricas. De esta forma tiene lugar el rápido incremento de un nuevo ejército de pobres urbanos que, además de la pobreza material, soportan situaciones críticas de exclusión y vulnerabilidad sociales. Dada la situación de sobrevivencia extrema que experimentan, no pocos de estos grupos sub-urbanos emergentes llegan a asumir comportamientos delictivos.

Además de los ya mencionados, la concentración y extranjerización de la tierra también generan otros impactos socio-políticos. Uno de ellos es el daño ambiental y de la salud de las personas causado por los productos contaminantes empleados por las empresas agrarias. El problema está tornándose más crítico porque, mientras que los grupos campesinos y sus organizaciones se movilizan e intentan impedir la aplicación de agroquímicos tóxicos, movilizaciones que desembocan en enfrentamientos con las fuerzas policiales, los empresarios, generalmente extranjeros, niegan que dichos productos sean nocivos y contaminantes. En parte, el agravamiento de estos conflictos deviene de la no aplicación de las normas de protección del medio ambiente. Es una falencia que proviene tanto de la irresponsabilidad de los empresarios como de la inacción de las entidades estatales correspondientes.

El otro problema radica en el incumplimiento de la Ley de la Zona de Seguridad Fronteriza del año 2005. Según la misma, en dicha zona, que comprende la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas fronterizas, los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes no podrán ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales. Cuando se inició el relevamiento de datos en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraguay se constató que en esas zonas más de 60% de los propietarios eran extranjeros, mayoritariamente brasileños. Pero cuando se intentó continuar el relevamiento, la pertinaz resistencia de los empresarios extranjeros de someterse al mismo, y en ciertas ocasiones al acompañamiento de campesinos sin tierra, desembocó en luchas cruentas y esta tarea estatal no pudo ser concluida. Se trata de una cuestión política compleja que implica un debilitamiento de la soberanía nacional y que el Estado paraguayo tiene como una importante deuda a ser saldada en los años venideros.

Entre los desafíos que surgen de estas cuestiones agrarias generadas por la concentración y extranjerización de la tierra, sobresale el modelo de desarrollo a ser promovido en el futuro. La opción favorable consistiría en que los grupos campesinos y empresariales, nacionales y extranjeros, consensuen mantener y fortalecer aquellos territorios en los que sigue operando la agricultura familiar campesina y las comunidades indígenas, en las regiones donde, en la actualidad, predomina la empresa agraria. Para ello, entre otros condicionamientos imprescindibles, resultará necesario definir y poner en ejecución una política de desarrollo rural que comprenda la ejecución efectiva de la reforma agraria; política que, a su vez, requerirá de un Estado que sea capaz de lograr el consenso social y, sobre todo, político entre los actores sociales que hasta ahora siguen confrontados.

La otra opción es que ese consenso socio-político y la puesta en vigencia de la política de desarrollo rural inclusivo no se puedan lograr por causa de la agudización de la lucha y porque los actores sociales, estatales y políticos no encuentren las vías para alcanzar tales objetivos.

En cualquiera de las dos opciones, los papeles de los agentes del capital extranjero, las agencias técnicas internacionales y los Estados extranjeros tendrán incidencia importante.



Piribebuy 1058 entre Colón y Hernandarias
Tel.: (595-21) 494 140 / 496 813 / 452 520
cadep@cadep.org.py / prensa@cadep.org.py
www.cadep.org.py



entre paréntesis

estudio de diseño
(0981) 145770
marina@entreparesis.com.py